

INFORMARTIVO DE RELATORIA ENERO 2024

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<p>Consejo de Estado</p> <p>Sala de lo Contencioso Administrativo</p> <p>Sección Cuarta</p> <p>C.P. Wilson Ramos Girón</p>	<p>Acción de Tutela</p> <p><u>11001-03-15-000-2023-05139-00</u></p> <p>Sentencia del 16 de noviembre de 2023</p>
<p>La Sección resolvió acción de tutela contra sentencia de reparación directa que declaró la caducidad parcial de la acción por hechos relacionados con desplazamiento forzado, agresión sexual y agresión con ácido por su condición de líder comunitaria.</p> <p>Para la Sala, conforme con los criterios fijados por la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, la situación permite identificar que se trata de un caso en el que debió aplicarse un enfoque diferencial y de género, pues gira en torno a una mujer en estado de vulnerabilidad, que acudió ante el Estado en busca de protección a su vida e integridad, pero que no obtuvo las medidas idóneas que requería.</p> <p>Consideró el Alto Tribunal, que la decisión judicial demandada no solo debía considerar los aspectos legales sobre la caducidad de la acción, sino también los aspectos fácticos y las dimensiones sociales y de género que rodearon la violencia sufrida por la demandante.</p> <p>En tal sentido, se dejó sin efectos la sentencia dictada por el Tribunal accionado, y ordenó dictar sentencia de reemplazo.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<p>Consejo de Estado</p> <p>Sala de lo Contencioso Administrativo</p> <p>Sección Segunda</p> <p>Subsección A</p> <p>C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas</p>	<p>Nulidad y Restablecimiento del Derecho</p> <p><u>05001 23 33 000 2021 00664 01 (3612-2022)</u></p> <p>Sentencia del 30 de noviembre de 2023</p>
<p>La subsección resolvió controversia legal en torno a la prima de vida cara para servidores y pensionados del Departamento de Antioquia. Esta prestación fue creada mediante la Ordenanza 033 de 1980, la cual no fue declarada nula por el Consejo de Estado en una sentencia de 2018. Sin embargo, el Departamento de Antioquia interpuso nuevo proceso de nulidad contra dicha Ordenanza.</p>	

En consecuencia, la prima de vida cara para los pensionados del Departamento de Antioquia no goza actualmente de efectividad jurídica debido a su suspensión provisional. Además, el Consejo de Estado ha declarado la nulidad de otras ordenanzas que creaban esta misma prestación, al considerar que contravenían normas constitucionales sobre competencias para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

El Alto Tribunal aclara que, aunque la Ordenanza 033 de 1980 no fue declarada nula en la sentencia de 2018, su legalidad se encuentra en discusión en el proceso de nulidad interpuesto por el Departamento de Antioquia (objeto de suspensión provisional por el Tribunal Administrativo de Antioquia). Por lo tanto, no es viable ordenar la reactivación del pago de la prima de vida cara hasta que se resuelva este proceso judicial en curso.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B C.P. Martín Bermúdez Muñoz	Reparación Directa 41001233100020100013002 (59969) Sentencia del 19 de octubre de 2023

La Sala al decidir recurso de apelación, revocó sentencia que accedió a las pretensiones por el secuestro del que fue víctima la excongresista Consuelo González de Perdomo; y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Consideró la Subsección que, en el presente asunto, no se probó que la autoridad accionada hubiera omitido el deber jurídico de protección invocado, porque fueron omisiones de la propia víctima las que influyeron en la materialización del riesgo, pues era necesario que le informara sobre cada uno de sus desplazamientos, a fin de determinar las medidas preventivas que fuera menester. Como no se probó que la excongresista hubiera alertado a las autoridades sobre el riesgo que iba a asumir con el desplazamiento que efectuó el día de su secuestro, se entiende que esta incumplió con el deber que le asistía para que la Policía pudiera asumir su protección.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B C.P. Alberto Montaña Plata	Reparación Directa 76001-23-31-000-2006-00041-01 (53435) Sentencia del 30 de noviembre de 2023

La Sala al decidir recurso de apelación, confirmó sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda por daños producidos a menor al momento de nacer.

Consideró la Subsección, que el daño alegado consistente en las afectaciones de la menor que habrían tenido lugar durante su nacimiento, fueron acreditadas a través de la historia clínica y de los testimonios técnicos. Que, aunque no se demostró la causa del daño, una decisión contraria desmejoraría la situación del apelante único.

Consideró sobre la pérdida de oportunidad, que cuando se desconocen las razones que produjeron una afectación, las consideraciones no pueden suplir la actividad probatoria en cabeza del demandante; ni sustentar y conceder tipos de perjuicios ajenos a la jurisdicción.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B C.P. Fredy Ibarra Martínez	Repetición 66001-23-33-000-2015-00290-02 (68.841) Sentencia del 30 de noviembre de 2023

La Sala resolvió recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda que declaró responsable a ex gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira por ordenar desvincular al subgerente de Planeación Estratégica y Corporativa, decisión que posteriormente fue objeto de un proceso laboral en el que se condenó a la empresa a reintegrarlo y pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir. La empresa busca recuperar el valor de esa condena a través de la acción de repetición.

El tribunal de primera instancia consideró que la demandada obró con culpa grave al impartir la orden de desvinculación sin autorización de la junta directiva y sin tener en cuenta el derecho convencional del subgerente.

La Subsección revocó la decisión de primer grado, y en su lugar: i) declaró probada la falta de legitimación en la causa de la parte pasiva, ya que la demandada fungió como trabajadora particular y no ejerció función pública en relación con los hechos que dieron lugar a la repetición en su contra, y ii) denegó las súplicas de la demanda.

Fuente	Radicación / Fecha
<p>Corte Constitucional</p> <p>M.P. José Fernando Reyes Cuartas</p>	<p>Sentencia T-311 del 15 de agosto de 2023</p>
<p>La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a una vida digna mujer que se desempeñaba como patinadora profesional e instructora de ese deporte. Sin embargo, con apenas 22 años, en el año 2001 fue diagnosticada con un tumor cerebral y sometida a una cirugía para su extracción.</p> <p>La accionante realizó cotizaciones al sistema pensional en vigencia de la ley 100 de 1993, que exigía haber aportado 26 semanas en el año anterior al momento de estructuración de la capacidad laboral.</p> <p>Para la Sala se debía dar aplicación retrospectiva de la ley 860 de 2003 en el reconocimiento de la pensión de invalidez, por cuanto el dictamen que estableció una pérdida de capacidad laboral del 93,40 % fue proferido en el 2022, y aportó un número superior a las 50 semanas exigidas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración.</p> <p>Por tanto, la Sala amparó los derechos fundamentales de la accionante y ordenó al fondo el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<p>Corte Constitucional</p> <p>M.P. Dian Fajardo Rivera</p>	<p>Sentencia T-531 del 1 de diciembre de 2023</p>
<p>La Sala Tercera de Revisión amparó los derechos al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y a la igualdad de Patricia y sus hijos Carolina y Andrés, quienes presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá y el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia en el marco de un proceso de reparación directa.</p> <p>La Sala, en su análisis, concluyó que se configuró el desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que el Tribunal falló de forma distinta casos idénticos, sin proveer razón suficiente y razonable para ello; transgrediendo así el derecho a la igualdad de Patricia y de sus hijos.</p> <p>Además, la Sala consideró que se configuró una indebida valoración probatoria, en la medida en que el Tribunal no tuvo en cuenta que, en otro proceso se demostró que, para la fecha y lugar de los hechos, hubo presencia militar y que el artefacto</p>	

explosivo que acabó con la vida de Gonzalo tuvo el propósito de afectar a la Fuerza Pública.

Así, el Alto Tribunal ordenó proferir una nueva sentencia, valorando todo el acervo probatorio, y en caso de decidir separarse del precedente, motivara con suficiencia la decisión.

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera	Sentencia T-582 del 19 de diciembre de 2023
<p>La Sala Séptima de revisión conoció de acción de tutela por el estado de infraestructura de un puente hamaca que conecta sector Santa Isabel del Municipio de El Playón, Santander con el casco urbano del Municipio.</p> <p>Aunque los jueces de instancia declararon la improcedencia de la acción de tutela, la Sala revocó las decisiones de instancia y amparó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de la accionante y la comunidad, el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes residentes en el sector Santa Isabel, así como el derecho de petición de la accionante.</p> <p>La Corte determinó también que, las entidades accionadas amenazaron el derecho a la salud, en su faceta de accesibilidad física, de la accionante y de los habitantes del sector. En efecto, encontró que el estado de infraestructura del puente constituye una barrera física para que la comunidad pueda acceder al centro de salud más cercano.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. José Fernando Reyes Cuartas	Sentencia T-560 del 15 de diciembre de 2023
<p>La Sala Novena de Revisión conoció acción de tutela interpuesta por mujer en representación de su hija Mariana y en contra de la empresa de medicina prepagada Colsanitas y la EPS Sura. Consideró vulnerado el derecho de la niña a la salud por la negativa de las entidades de prestar el servicio de terapias integrales prescrito por el médico de la entidad.</p> <p>En su análisis, la Corte consideró que la empresa de medicina prepagada vulneró el derecho a la salud de la menor toda vez que desconoció el principio de continuidad en salud al interrumpir un tratamiento con base en razones puramente administrativas o contractuales; incumplió sus deberes respecto del ejercicio de la</p>	

actividad económica que desarrolla, e incluyó en el contrato cláusulas contrarias a la Constitución según la jurisprudencia constitucional.

La Sala revocó la decisión de instancia y, en su lugar, concedió el amparo. Además, frente a Colsanitas le ordenó realizar una nueva valoración de la niña y prestar los servicios que esta requiera para la atención de su patología y la previno para que se abstenga de incurrir en las conductas vulneradoras de derechos constatadas en la sentencia.

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar	Sentencia SU-016 de 2024 Comunicado No. 01 de 2024
<p>La Corte analizó acción de tutela presentada contra sentencia dictada por la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del proceso de reparación directa iniciado por las hoy demandantes en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con ocasión del fallecimiento de un ciudadano, el 22 de junio de 2002, al interior de un Batallón de Artillería.</p> <p>Una de las hipótesis de la muerte de la víctima, plantea que los señores Eduar Cáceres Prado y Carlos Alberto Pumarejo Lopesierra habrían sido aprehendidos y retenidos horas antes de su muerte y, posteriormente, ejecutados de manera violenta, para finalmente ser presentados falsamente como integrantes de grupos armados al margen de la ley. La que coincide en parte con la del proceso de reparación directa seguido por la muerte del señor Carlos Pumarejo Lopesierra y con el proceso seguido ante la Jurisdicción Especial para la Paz en virtud del cual la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y conductas dictó el Auto 128 de 2021 dentro del caso denominado “03 Asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado” – Subcaso Costa Caribe.</p> <p>Así, la Corte entre otras determinaciones, ordenó a la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, tener en cuenta decisión de fondo proferida por la Jurisdicción Especial para la Paz al resolver recurso extraordinario de revisión.</p>	